

Ahora
EL PUEBLO

DEBATE

Nº 56
SUPLEMENTO
POLÍTICO
Domingo 15 de
septiembre de 2024



México, liderazgo y AMLO

El sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está por concluir.

Ahora
EL PUEBLO

DIRECTOR
Carlos Eduardo
Medina Vargas

COLABORADOR
Paulo Cuiza

**DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN**
Gabriel Omar
Mamani Condo

CORRECCIÓN
José María
Paredes Ruiz
Karen Keyla
Nina Pino

Redes Sociales


www.ahoraelpueblo.bo

La Paz-Bolivia
Calle Potosí, esquina
Ayacucho N° 1220.
Zona central, La Paz.
Teléfono: 2159313.

Los conceptos planteados en los artículos publicados en **Debate** no reflejan necesariamente la línea editorial de **Ahora El Pueblo**. Consideramos importante, sin embargo, que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral sobre un tema en particular.

DEBATE

Jueces 'sin rostro' en México: ¿una propuesta que protege o que vulnera derechos?

SPUTNIK

DANIEL GARCÍA

La recién aprobada reforma al Poder Judicial en México incluye la aplicación de la figura de los llamados 'jueces sin rostro', que es utilizada para proteger la identidad de los impartidores de justicia cuando llevan casos relacionados con el crimen organizado.

De acuerdo con la nueva legislación aprobada en la Cámara de Diputados, la figura de los jueces sin rostro fue integrada en la fracción X del apartado A, del artículo 20 de la Constitución. La adición fue impulsada por el partido oficialista Morena y sus aliados. Y aún falta que sea aprobada por el Senado.

"Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadas, conforme al procedimiento que establezca la ley", se lee en la iniciativa.

La instauración de los jueces sin rostro fue una propuesta específica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en diferentes ocasiones planteó que debería existir una figura en la nueva ley que brinde protección para jueces que tienen que resolver casos sobre delincuencia organizada.

Días antes de la aprobación, este mecanismo no estaba presente en la propuesta de la reforma al Poder Judicial, por lo que el 20 de agosto, López Obrador pidió al Poder Legislativo presentar una propuesta.

"Hay algo que debe tener la reforma, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada, cómo protegerlos. Un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozca (...) buscar una forma que se pueda hacer, porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones", dijo el mandatario el 20 de agosto.

Aunque se supone que esta figura está pensada para cuidar a los jueces que impongan sentencias contra alguna persona relacionada con un caso sobre crimen organizado —lo cual podría poner en peligro sus vidas—, varias organizaciones y expertos se han opuesto a ella porque podría violar los derechos humanos de las personas juzgadas, quienes podrían incluso ser inocentes debido a la gran escala de corrupción que existe en México desde los niveles policiales más bajos.

El 27 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se expresó en el mis-

mo sentido y consideró que se debe proteger a los jueces sin vulnerar el derecho a un juicio justo.

"La figura de jueces sin rostro impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia. Hay que proteger a las personas juzgadas, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial", publicó en su cuenta de X la ONU-DH México.

Abdias Pedroza insiste en que el sistema judicial mexicano no se presta para esa figura, pues en él existe mucha arbitrariedad respecto de la resolución de los procesos.

"No estamos en un sistema de justicia penal donde se preste para jueces sin rostro, porque si así hay mucha arbitrariedad respecto de la resolución de los procesos, imagínate los jueces escondidos y que no se sepa quién emitió la sentencia, o cómo se sentenció. No es tan viable esta propuesta", agregó.

JUECES, BAJO ACECHO

Recientes estudios realizados por la organización México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de derecho (IFED) revelan que el personal litigante y juzgador que labora en el país es víctima de amenazas, ataques e incluso son asesinados por realizar su trabajo en un entorno de violencia.

México Evalúa señala que, a partir de una revisión hemerográfica, dada la carencia de registros oficiales, encontraron que hay 15 casos de personas juzgadas asesinadas entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos personas juzgadas a nivel federal, lo que da un total de 17 jueces asesinados en poco más de una década.

"Los causantes de las agresiones hacia el personal ju-

dicial suelen ser las partes del juicio, la persona imputada o alguien de su entorno, integrantes de grupos de la delincuencia organizada, y el propio Estado, a través de las fiscalías y los ejecutivos federal y local", se lee en el informe.

Los estudios también revelan las amenazas y agresiones a las que se enfrenta el personal relacionado con los juicios y procedimientos legales.

"El 69% de las personas abogadas litigantes afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional. En cuanto a las personas juzgadas encuestadas, el 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que respondieron en este sentido el 52% del personal notificador o actuario (quienes dan trámite a las resoluciones judiciales)", agregan las organizaciones.

EL CASO COLOMBIA

La figura del tribunal sin rostro, o también denominado jueces sin rostro, fue creada en Italia, donde se implementó durante los juicios contra las mafias locales. También se ha utilizado en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori; en Brasil, donde fue aprobado por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro en 2019, y en Colombia durante la década de 1990 para juzgar a jefes del narcotráfico.

Mendoza asegura que esa medida no es recordada con cariño en Colombia, pues se presentó en un contexto de mucha violencia y, además, dotaba de un fuero y un blindaje especial a los juzgadores frente a sus decisiones.





La prioridad para el Frente Amplio es combatir la pobreza infantil en Uruguay

PRENSA LATINA

A sí lo consignó la candidata a senadora Blanca Rodríguez, en el acto de lanzamiento de la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, que lidera el expresidente José Mujica e integra el FA.

Fue la primera alocución pública de Rodríguez como política, luego de más de 30 años frente a las cámaras como conductora de un seguido noticiero de televisión.

“Tenemos una deuda enorme con los niños en Uruguay. Somos el país con el mayor nivel de pobreza infantil de la región”, sostuvo en el acto de campaña.

Los niños se tienen que convertir en el foco de los esfuerzos porque en nuestro país son más pobres que la sociedad en general, porque nos convertimos en un país muy desigual, remarcó.

Datos del Instituto Nacional de Estadística

ca indican que el 20 por ciento de los infantes menores de seis años viven en la pobreza.

“He hablado de cosas muy simples que hay gente que no tiene hoy: una casa, un techo, padres que trabajaban de sol a sol, tener una cama. Además de esas cosas hay una serie de valores, un estilo de vida, que también hay que recuperar”, apuntó.

Rodríguez se manifestó “tremendamente esperanzada” sobre los comicios nacionales fijados para el 27 de octubre, y subrayó que la seguridad pública será otro eje prioritario para la alianza de izquierda.

La candidata rindió homenaje a José Mujica, de quien dijo: “Fue clave para convencerme, para entusiasarme a comprometerme con esta propuesta”.

El líder del MPP fue operado la víspera para colocarle una sonda que permitirá alimentación líquida directo al estómago, y aliviar las secuelas en el esófago provocadas por sesiones de radioterapia contra el cáncer.

DESIGUALDAD ECONÓMICA EN AUMENTO: UNA ADVERTENCIA PREOCUPANTE

La desigualdad social fue otro de los puntos clave en el discurso de Rodríguez, quien advirtió sobre las brechas económicas que se han acentuado en los últimos años. “En los últimos cinco años, el 5% de la gente en mejor posición fue la que acrecentó su situación económica, mientras que el 20% más pobre se empobreció aún más”, señaló. Este desequilibrio económico pone en riesgo el tejido social del país y plantea la necesidad de reformas estructurales que aseguren una mayor equidad y oportunidades para todos los uruguayos.

Rodríguez no solo denunció la situación actual, sino que también ofreció propuestas concretas, como el fortalecimiento de los programas de educación y empleo digno, asegurando que estos son pilares fundamentales para revertir la situación de los sectores más vulnerables. “Sabemos que cuando a algunos lugares no llega la educación, no llega trabajo digno, llegan otros primero que ofrecen salidas mucho más fáciles, que suelen terminar muy mal”, advirtió y señaló los riesgos asociados a la falta de oportunidades.

México “recuperó su liderazgo” en los momentos en los que AML...

SPUTNIK

ANGÉLICA FERRER

El sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está por concluir; en su mandato, logró que la nación tome una nueva postura de liderazgo en América Latina, de acuerdo con expertos consultados por Sputnik.

Durante su mandato, el Jefe de Estado no solo apostó por impulsar políticas para atender las problemáticas nacionales y procurar el desarrollo del país que aún gobierna, sino también se decantó por insistir en la colaboración entre los Estados latinoamericanos.

“En términos generales, la política exterior en este sexenio favoreció y apoyó una visión multilateral, donde no solo los países más ricos pueden tener el peso en la (agenda) internacional (...) En el análisis de Latinoamérica y México, el balance es muy positivo porque (el territorio mexicano) recuperó su liderazgo (regional) gracias a sus propuestas”, reflexiona en entrevista para Sputnik el doctor en Historia y académico de la Universidad Rosario Castellanos, Javier Gámez.

En este sentido, el doctor en Sociología por el Colegio de México (Colmex), Julián Atilano, destaca en diálogo con Sputnik que las estrategias y actitudes del presidente mexicano también le brindaron legitimidad a lo largo de América Latina.

“Actualmente, se vuelve a pensar en una reintegración regional económica y política en una parte simbólica, pero también en los hechos (...) Es paradójico que un presidente que, desde el principio, dijo que no saldría del país y se le criticó por ello, haya logrado tanto, sobre todo generar el restablecimiento en (la zona)”, apunta.

LA PANDEMIA DE COVID-19

Para Gámez, uno de los momentos clave en la gestión de López Obrador en la relación con América Latina fue su gestión durante la pandemia de Covid-19. A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), apoyó a 16 países de la región con 44 respiradores de manufactura nacional, 2,6 millones de



Liderazgo” en América Latina: AMLO impulsó a la región

vacunas y miles de paquetes de materiales e insumos médicos.

Además se pronunció en 2020 por la creación del mecanismo COVAX, con el fin de que las naciones menos favorecidas tuvieran mayor acceso a las dosis contra el coronavirus. Sin embargo, para febrero de 2021, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por no otorgar suficientes vacunas contra el coronavirus para la población.

“México, Argentina y Cuba comenzaron a establecer alianzas para que (los mexicanos) contaran también con insumos necesarios, como las vacunas. Considero que fue uno de los mayores logros de este Gobierno, (éxito) que, incluso, se prolonga porque realizó un esfuerzo muy grande para que las economías avanzaran tras el levantamiento de las medidas sanitarias por el COVID-19”, expone el experto.

Prueba de ello fue la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación que, en 2023, emitió una

declaratoria donde acordaron, entre varios puntos, el intercambio de productos de la canasta básica y otros bienes con el fin de abaratar los costos y disminuir el alza del índice inflacionario en la región.

UN NUEVO AIRE PARA LA CELAC

Otro de los momentos donde las acciones de la administración encabezada por AMLO tuvieron una gran repercusión en Latinoamérica fue en 2021, cuando México fue sede de la VI cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), esto en la época donde la nación tuvo la presidencia pro t mpore del grupo.

“En los discursos, L pez Obrador, junto con los integrantes, redirigieron la Celac para que sea un instrumento de integraci n de Am rica Latina. Lo primero que proyectaron fue que Latinoam rica se fortalezca para, posteriormente, negociar con EEUU, ya contando con una mayor capacidad social, pol tica y econ mica. Para el Gobierno mexicano, esto ha sido muy relevante porque, en lo general, lo que plantean es un instrumento que puede traer m ltiples beneficios”, explica G mez.

Prueba de esto es que, durante la presidencia pro t mpore de M xico, se cre  el Fondo de Adaptaci n al Clima y Respuesta Integral a Desastres Naturales (FACRID), para la dispersi n de recursos econ micos a partir de contribuciones voluntarias de los integrantes de la Celac y socios del bloque para atender esta clase de siniestros.

Para 2023, cuando el liderazgo del bloque pas  a San Vicente y las Granadinas, M xico, Colombia y Cuba firmaron la Declaraci n de Acapulco, con el fin de formalizar las negociaciones para fundar la Agencia de Medicamentos de Am rica Latina y el Caribe (Amlac), que tiene como fin la autosuficiencia sanitaria y el acceso a insumos m dicos.

Pero uno de los momentos clave de M xico y la Celac fue luego del asalto a la embajada mexicana en Quito, ocurrido el 5 de abril de 2024. El bloque respald  al Gobierno mexicano, a grado tal que los mandatarios de Honduras, Xiomara Castro, y de Venezuela, Nicol s Maduro, retiraron a sus diplom ticos en suelo ecuatoriano.

POL TICA DE APOYO HACIA LOS DEM S

Otro de los  mbitos en donde el mandato del presidente mexicano destac  fue en apoyar con programas sociales a Am rica Latina, especialmente a las naciones que tienen un alto  ndice de personas que abandonan su pa s por cuestiones de seguridad y pobreza, entre otros.

“Un ejemplo es Sembrando Vida, que tiene doble funci n. Por un lado, es resolver un tema medioambiental, pero, en el fondo, es controlar la migraci n irregular. Esta no es una situaci n, como se piensa en Estados Unidos, que es ponerle una barrera a la gente para que no lleguen (a su pa s), sino que se queden (en su sitio de origen). Tal y como dice el mandatario, nadie quiere salir del lugar donde vive, por lo que este tipo de iniciativas generan empleos y buscan resolver el problema, especialmente en Centroam rica”, ahonda Atilano.

En esta materia, recientemente present  el plan Vuelta a la Patria, que consiste en repatriar a las personas migrantes de Venezuela y Colombia y, al regresar a su pa s natal, recibir n 110 d lares al mes durante un semestre. Esta estrategia tambi n aplica en Ecuador.

Adem s, a finales de 2023, el mandatario mexicano convoc  a naciones de Am rica Latina y el Caribe al Encuentro de Palenque, con el fin de establecer una hoja de ruta para apoyar a las personas migrantes irregulares y, sobre todo, atender las causas de este fen meno.

Pero la ayuda no solo se ha dado en pol ticas p blicas o de integraci n regional, sino en aspectos pol ticos, indica el doctor en Sociolog a por el Colmex.

“La intervenci n que tuvo M xico para salvar a Evo Morales enviando un avi n a Bolivia es una muestra de inter s democr tico, de respeto a la soberan a de los pueblos y a la voluntad democr tica de la propia ciudadan a”, puntualiza.

Un apoyo similar fue el que ofreci  al expresidente peruano, Pedro Castillo, despu s de que este pidiera asilo pol tico a M xico a finales de 2022. Su encarcelamiento y el que no se permitiera su traslado a la naci n latinoamericana son parte de los eventos por los cuales L pez Obrador sostiene una tensa relaci n con la actual mandataria peruana, Dina Boluarte.



Cómo Brasil sobrevive sin X

DW

GÜNTHER MAIHOOLD

Elon Musk estableció una actitud más permisiva hacia publicaciones en X que incitan al odio y al extremismo de derecha. Pero Brasil no es el único lugar donde Musk enfrenta conflictos, escribe Günther Maihold.

Por orden del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, la plataforma X ha dejado de funcionar en el país, ya que se la acusa de difundir noticias falsas y mensajes de odio. Esta suspensión del servicio afecta a 22 millones de usuarios que han tenido que adecuar sus costumbres digitales, si es que no logran esquivar el acceso bloqueado mediante una VPN.

Detrás del conflicto entre las autoridades judiciales brasileñas y el dueño de X, Elon Musk, se esconde una controversia sobre los usos para fines políticos que esta red digital está dando a posiciones extremistas, calumniosas y discriminatorias. Musk, por su parte, invoca la libertad de expresión y habla de "censura". Esta confrontación se está convirtiendo en un hito en la política mediática más allá de las fronteras brasileñas, ya que Musk indicó que pasará lo mismo en EEUU en caso de que Kamala Harris sea elegida presidenta.

ANTECEDENTE POLÍTICO EN BRASIL

El caso se remonta a los ataques del 8 de enero de 2023, cuando los tres poderes del Estado brasileño fueron invadidos por manifestantes antidemocráticos en la capital, Brasilia. Estos sucesos formaban parte de un movimiento organizado que intentaba interrumpir el gobierno legítimo y legalmente electo de Luiz Inácio Lula da Silva mediante el uso de la fuerza. Antes de eso ya la extrema derecha había establecido estrategias digitales en X, instigadas por el expresidente Jair Bolsonaro, para influir en dicha red con posiciones extremistas, por lo cual el Tribunal Supremo había ordenado a X que eliminara los perfiles en entredicho.

Sin embargo, la empresa se resistió a esas órdenes, por lo que el juez procedió a embargar las cuentas bancarias de otra empresa de Musk, Starlink, con el fin de asegurar el pago de las multas impuestas, después de que X hubiera cerrado sus oficinas en Brasil ante el riesgo de que sus empleados fueran afectados por no cumplir con las resoluciones judiciales.

Como el propietario de X se negó a nombrar un representante legal en el país, el juez procedió a pedir a las autoridades reguladoras competentes de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones que suspendieran el servicio de esa red social. De hecho, se debate si la ley que garantiza la libertad de expresión también protege a los ciudadanos de la incitación al odio y la desinformación.

UE: X ENGAÑA A LOS USUARIOS

Brasil no es el único país donde Elon Musk se enfrenta a conflictos. Otro caso abierto es el de Musk con las autoridades europeas que supervisan la red. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, comentó al respecto que "X no cumple con la Ley de Servicios Digitales (LSD) en áreas clave de transparencia (...) por lo tanto, engañando a los usuarios". Asimismo, esa Comisión de la UE indicó que "X no cumple con la transparencia requerida en materia de publicidad, ya que no proporciona un repositorio de publicidad fiable y con capacidad de búsqueda". Y que "no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores", como lo determina la normativa que rige en el bloque. "Es la primera vez que emitimos conclusiones preliminares en virtud de la Ley de Servicios Digitales", subrayó Vestager. Lo que la UE espera de X es que establezca procesos sólidos para eliminar mensajes ilegales, como los que promueven el terrorismo, y que su diseño general tenga como objetivo limitar los riesgos sociales de la desinformación generalizada.

Pero ese objetivo no es compartido por Musk, quien, después de la adquisición de Twitter y su conversión en X, ha establecido una actitud más permisiva hacia las publicaciones controvertidas, habiendo recortado, según la Comisión Europea, el equipo de moderadores de contenidos. Además, X no es signataria del código de buenas prácticas europeo sobre desinformación, mientras que TikTok, propietario de YouTube Alphabet (GOOGL.O), y Meta Platforms (META.O),

propietario de Facebook e Instagram, se comprometieron con este reglamento. Por la intransigencia de Musk, abandonar su presencia en Europa podría ser técnicamente posible para X, lo cual dejaría fuera de esa red social a unos 67 millones de usuarios.

LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE X EN BRASIL

Así las cosas, la plataforma alternativa BlueSky informa que en los últimos días se han registrado 2,8 millones de nuevos usuarios, el 85 por ciento de los cuales proceden de Brasil. También se ha registrado una afluencia de usuarios en Threads e Instagram. Sin embargo, muchos usuarios recurren al uso de una VPN, especialmente aquellos medios de comunicación que dependen mucho de la dimensión digital, a pesar de que las multas para quien intente acceder a X a través de una VPN en Brasil ascienden a unos 8.000 euros.

Para sortear ese obstáculo, medios como los diarios Folha de São Paulo y O Estado de S. Paulo recurren a sus corresponsales en el resto del mundo para seguir publicando contenido en X para sus seguidores. No hay que olvidar que la plataforma de Elon Musk es utilizada también como instrumento de comunicación institucional por parte del Gobierno federal de Brasil (incluido el propio presidente) y otras instancias del Estado, así como por los candidatos a las elecciones municipales que se celebrarán el 6 de octubre. Ante los recursos presentados para derrumbar las decisiones del juez Alexandre de Moraes, la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) acordó por unanimidad mantener la suspensión de X en el país. El conflicto sigue su curso y habrá que esperar a que una de las partes esté dispuesta a negociar.



Colombia en la encrucijada: golpe de Estado y resistencia social

ALFONSO RODRÍGUEZ TELESUR

Colombia atraviesa una delicada situación política después del reciente paro de un sector poderoso del gremio de transporte de carga pesada en el país, que el gobierno logró sentar en la mesa y, en tiempo récord, acordar rutas de solución.

Ahora el presidente Gustavo Petro hace frente a las recientes investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación de su campaña presidencial de 2022. El mandatario denunció que esta investigación, liderada por el magistrado Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán, del Centro Democrático, partido de derecha que representa al expresidente Álvaro Uribe, forma parte de un plan para ejecutar un “golpe de Estado” en su contra, mientras que movimientos sociales, sindicatos y comunidades étnicas ya anuncian movilizaciones para defender al actual gobierno.

El CNE ha iniciado una investigación alegando que la campaña de Petro habría superado los topes de gastos permitidos, y recibido fondos de fuentes prohibidas, algo que contraviene la legislación electoral colombiana. Entre las acusaciones más graves se encuentra el presunto exceso en los gastos de campaña por más de 5.300 millones de pesos, además de aportes no declarados de personas jurídicas, como el principal sindicato de educación y el partido Polo Democrático, ambos aliados del mandatario.

Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, negó rotundamente las acusaciones y cuestionó la autoridad del CNE para investigar a un presidente en ejercicio. Según Petro, esta función corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no a un órgano administrativo como el CNE, lo cual contraviene la norma constitucional. El presidente asegura que este proceso es parte de una estrategia más

amplia para desestabilizar su gobierno, afirmando que “la Constitución no permite que un órgano como el CNE prepare el camino para suspender al presidente”.

Las denuncias de Petro no se limitan a irregularidades administrativas, sino que apuntan a una dinámica más profunda y arraigada en el país. El mandatario ha descrito la actual situación política como parte de una red de intereses entre sectores empresariales, la criminalidad y los poderes políticos que se niegan a aceptar cualquier tipo de transformación estructural.

En este sentido, las actuales investigaciones en su contra se perciben no como simples procedimientos administrativos, sino como una ofensiva coordinada por este régimen político para evitar cualquier cambio que altere el status quo. Se trata de todo un orden institucionalizado del mal en Colombia en acción.

Vale reiterar que precisamente este entramado ha sido históricamente responsable de la perpetuación de la violencia, el paramilitarismo y la corrupción en Colombia. Desde los sectores económicos más conservadores hasta los grupos políticos de extrema derecha y articulaciones de mafias han consolidado un sistema que hoy busca entorpecer y enlazar todo intento de cambios y reformas que promueva el actual presidente Gustavo Petro.

MOVILIZACIÓN SOCIAL EN DEFENSA DE GOBIERNO

Ante estas circunstancias, el movimiento sindical, étnico y popular ha tomado un papel activo para defender al gobierno de Gustavo Petro y la agenda de reformas que ha impulsado. Diversas organizaciones, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario (CNU) y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CNPC), han convocado a una asamblea nacional los días 14 y 15 de septiembre de 2024 para organizar una respuesta contundente.

En este marco, el 19 de septiembre se prevé llevar a cabo una jornada de movilización masiva para protestar en contra del “golpe de Estado” que, según sus organizadores, inten-

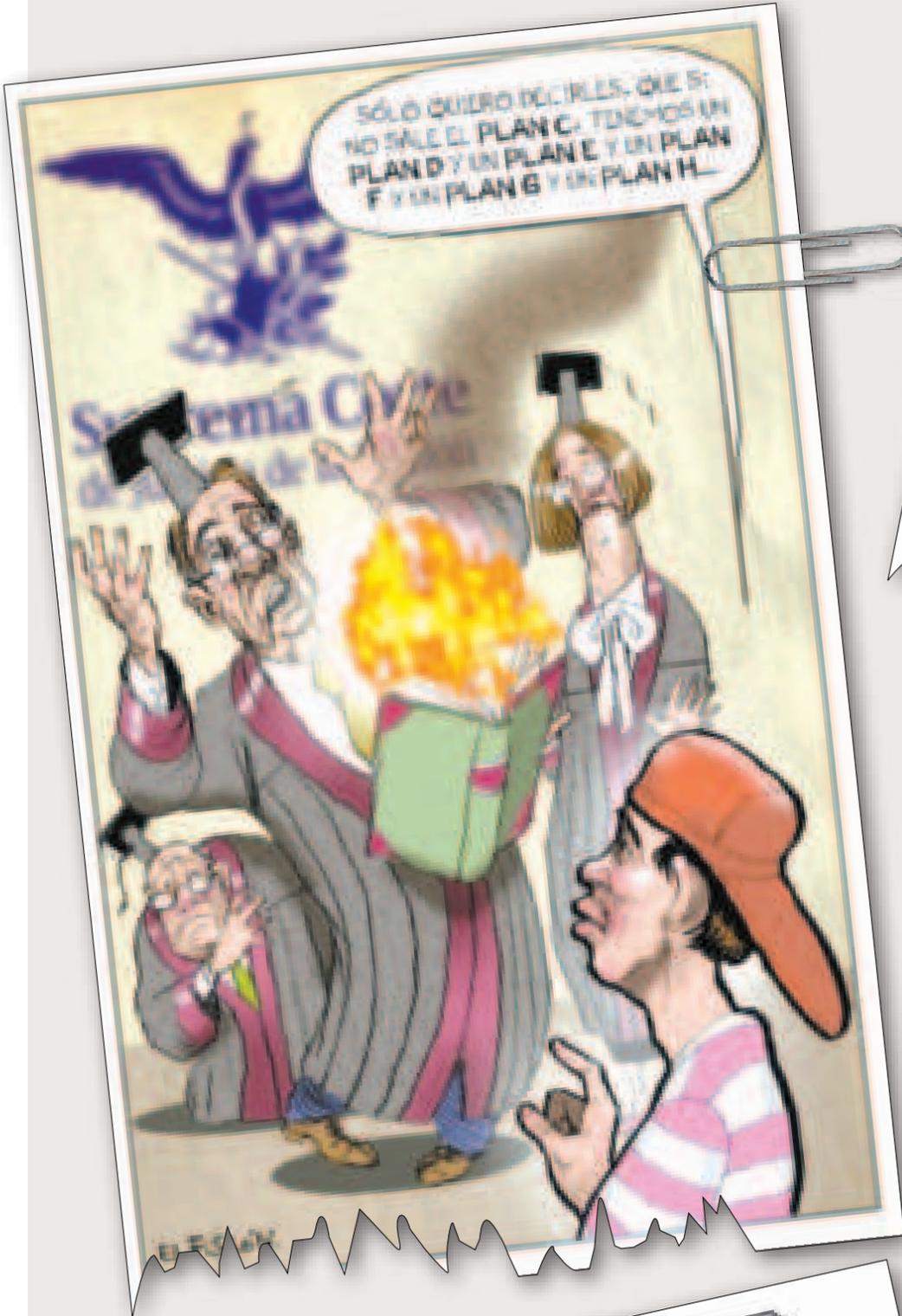
ta frenar las reformas sociales y políticas del gobierno. Esta movilización no solo busca defender la legitimidad del gobierno, sino también visibilizar la resistencia de los sectores populares frente a los intereses que históricamente han controlado el poder en Colombia.

Además, se ha lanzado una campaña de comunicación tanto a nivel nacional como internacional para denunciar lo que consideran un ataque contra la democracia y el proceso de transformación social en Colombia. Las comunidades étnicas y populares, que han sufrido históricamente los efectos de la violencia, el desplazamiento y el despojo, ven en el gobierno de Petro una oportunidad para romper con ese ciclo de opresión y ahora se movilizan en su defensa.

La crisis actual pone de manifiesto la profunda fractura entre un gobierno que busca implementar cambios estructurales y un régimen político que representa intereses profundamente enraizados en la violencia y la corrupción. El llamado “orden institucionalizado del mal” ha demostrado ser resistente a cualquier transformación, y la reacción ante las reformas de Petro es vista por muchos como una muestra de que los poderes tradicionales no están dispuestos a ceder su control sobre el país.

El futuro de Colombia parece depender, en gran medida, de la capacidad de las organizaciones sociales para consolidar una base de apoyo que permita sostener un proceso de cambio frente a las poderosas fuerzas que intentan impedirlo. El movimiento sindical, los pueblos étnicos y las comunidades populares han sido históricamente los más golpeados por este sistema, y ahora se presentan como la primera línea de defensa de un gobierno alternativo que desafía a los poderes establecidos.

La lucha no será fácil ni rápida, y es generacional. Sin embargo, las movilizaciones que se están organizando podrían marcar un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia, donde el pueblo se levanta no solo en defensa de un gobierno, sino de un futuro que busca romper con los ciclos de violencia, exclusión y corrupción que han dominado al país por décadas.



Caricatura global